

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO

Villavicencio, diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)

SALA PLENA

REFERENCIA:	MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
DEMANDANTE:	JOEL DARÍO TREJOS LONDOÑO.
DEMANDADO:	NACIÓN - RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO.
RADICACIÓN:	50001-33-33-005-2016-00125-01.

Sería el caso continuar con el trámite pertinente, y admitir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra el auto que negó la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia, dictado en audiencia inicial del 22 de junio de 2018 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio (conjuez), sin embargo, se advierte la configuración de dos causales de impedimento que serán analizadas en los siguientes términos.

ANTECEDENTES

JOEL DARÍO TREJOS LONDOÑO, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, solicitando como pretensión principal que se declare la nulidad de los actos administrativos oficio No. DESAJP14-715 de fecha 20 de agosto de 2014, por medio del cual se niega al demandante el pago de las prestaciones reclamadas sobre el 30% de la asignación básica mensual desde el 1 de enero de 1993; y la resolución 5015 del 21 de agosto de 2015, expedida por la directora ejecutiva de administración judicial, que confirmó la decisión.

Como consecuencia de la nulidad de dichos actos administrativos, solicita que se inaplique por inconstitucional el artículo 6 del Decreto 658 de 2008 y el artículo 8 del Decreto 723 de 2009, por cuanto dispusieron que se considerará como Prima, sin carácter salarial, el 30% del salario básico mensual de los jueces de la república; además que se condene al pago de las sumas de dinero dejadas de percibir al liquidar las prestaciones económicas y que corresponden al 30% de su asignación básica mensual desde el 1 de enero de 1993 hasta cuando se produjo su traslado al distrito judicial de Villavicencio.

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Expediente: 50001-33-33-005-2016-00125-01.
Auto Impedimento

La demanda fue repartida entre los Jueces Administrativos del Circuito de Villavicencio, no obstante, la totalidad de dichos Jueces manifestaron encontrarse impedidos para conocer de este asunto, por tener interés directo en el proceso, razón por la cual a través del proveído del 17 de mayo de 2016¹, este Tribunal aceptó el impedimento y ordenó el nombramiento de Juez Ad Hoc.

Seguidamente, dando continuación al trámite judicial, en la sesión de continuación audiencia inicial llevada a cabo el 22 de junio de 2018², el Juez Ad Hoc profirió auto negando las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia, y falta de legitimación en la causa por pasiva, formuladas por la entidad demandada; quien inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación.

Mediante auto dictado en la misma diligencia, se concedió el recurso de apelación de conformidad con los artículos 180 y 244 del C.P.A.C.A, correspondiéndole por reparto al Despacho No. 02³.

CONSIDERACIONES

En relación a las causales de impedimento, el artículo 130 del C.P.A.C.A., establece que los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los eventos allí señalados y en los casos consagrados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil⁴.

En ese sentido, el impedimento se configura teniendo en cuenta las causales previstas en los numerales 1 y 14 del artículo 141 del Código General del Proceso, aplicable como complemento del artículo 130 del C.P.A.C.A.; el cual preceptúa:

*"Artículo 141. Causales de Recusación. Son causales de recusación las siguientes:
(...)*

1. *Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, interés directo o indirecto en el proceso.*

14. *Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar." (Subrayado fuera de texto).*

Las causales citadas hacen referencia a que el juez compromete su imparcialidad por el interés que respecto del trámite o la decisión le asiste. La Sala Plena del Consejo de Estado ha entendido que para que se configure el impedimento "es menester que se trate

¹ Folios 3-4 cuaderno de Impedimento

² Folios 171-173 de cuaderno de primera instancia.

³ Folio 2 Cuaderno de segunda instancia.

⁴ Debiéndose entender Código General del Proceso al iniciar su aplicación a partir del 1º de enero del 2014, tal como lo precisó el Consejo de Estado en Providencia de la Sección Tercera, Consejero Ponente ENRIQUE GIL BOTERO, del (14) de mayo de dos mil catorce (2014), Radicación número 50001-23-31-000-2011-00462-01(44544).

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Expediente: 50001-33-33-005-2016-00125-01.
Auto: Impedimento

de un interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento, de manera que impida una decisión imparcial”⁵.

En cuanto al trámite que debe efectuar el juez colegiado al momento de advertir que está incurso en una de las causales de impedimento se debe atender a lo reglado en el numeral 5º del artículo 131 del C.P.A.C.A.:

“ARTICULO 131. DE LOS IMPEDIMENTOS. Para el trámite de los impedimentos se seguirán las siguientes reglas:

5. Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, el expediente se enviará a la Sección del Consejo de Estado que conoce del tema relacionado con la materia objeto de controversia, para que decida de plano. Si se declara fundado, devolverá el expediente al tribunal de origen para el sorteo de conjueces, quienes deberán conocer del asunto. En caso contrario, devolverá el expediente al referido tribunal para que continúe su trámite.

Conforme a las consideraciones esbozadas, es deber de los funcionarios judiciales apartarse de los asuntos en que pueda verse afectada su objetividad, exponiendo de manera clara y precisa los hechos susceptibles de afectar su imparcialidad al momento de adoptar una decisión, para que esta sea analizada por el juez que le sigue en turno o su superior.

HECHOS QUE SUSTENTAN EL IMPEDIMENTO

La referida acción de nulidad y restablecimiento del derecho, fue interpuesta por el Doctor JOEL DARÍO TREJOS LONDOÑO, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, quien solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que se le que se inaplique por inconstitucional el artículo el artículo 6 del Decreto 658 de 2008 y el artículo 8 del Decreto 723 de 2009, por cuanto dispusieron que se considerará como Prima, sin carácter salarial, el 30% del salario básico mensual de los jueces de la república. Además que se condene al pago de las sumas de dinero dejadas de percibir al liquidar las prestaciones económicas y que corresponden al 30% de su asignación básica mensual desde el 1 de enero de 1993 hasta cuando se produjo su traslado al distrito judicial de Villavicencio.

Se advierte entonces que las pretensiones de incremento de salario y prestaciones planteadas en el libelo, tiene como fuente primaria un derecho consagrado en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que dispuso:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra

⁵ Ver, entre muchos otros, el auto del 20 de septiembre de 2017. Radicación número: 18001-23-33-000-2013-00273-02 (59593). M.P. STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad." (Negrillas de la Sala).

El beneficio contenido en la norma citada, respecto del cual gravita el *petitum*, fue creado tanto para Jueces como para Magistrados de Tribunales Superiores y Contenciosos Administrativos, en tal sentido, la decisión del problema jurídico planteado en segunda instancia, puede afectar directamente los intereses particulares de quienes dirigimos esta corporación, pues no solo se pretende el pago retroactivo de una parte del salario, sino también la liquidación de las prestaciones de un funcionario judicial, que respecto del citado reconocimiento, está en similares condiciones a los suscritos.

En consideración de la materia objeto de litigio, se advierte que los Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta estamos incursos dentro de la causal establecida en el señalado numeral 1º del artículo 141 del C.G.P., a excepción de la Magistrada Claudia Patricia Alonso Pérez, y el ponente quienes invocamos la causal consagrada en el numeral 14 *ibidem*, toda vez que interpusimos demanda con similares pretensiones a las del *sub lite*.

Así las cosas, es necesario apartarnos del conocimiento del presente asunto, pues la futura decisión tiene vocación de constituirse en precedente que puede aplicarse directamente a nuestro régimen de salarios y prestaciones.

Con fundamento en las precedentes motivaciones, y a fin de resguardar la imparcialidad en la administración de justicia, se ordenará la remisión del expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado para que decida sobre el impedimento planteado de conformidad a lo establecido en el numeral 5º del artículo 131 del C.P.A.C.A.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta,

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR que los Magistrados del Tribunal Administrativo del Meta nos encontramos impedidos para conocer del presente proceso.

Acción:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Expediente:	50001-33-33-005-2016-00125-01.
Auto	Impedimento

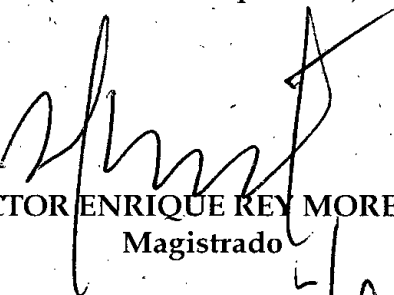
SEGUNDO.- REMITIR el expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado para lo de su competencia, conforme lo señalado en el artículo 131 del C.P.A.C.A.

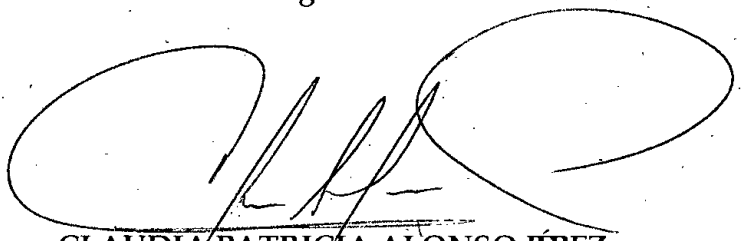
Esta providencia fue discutida y aprobada en Sala de decisión del día diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), según consta en acta N° 71 de la misma fecha.

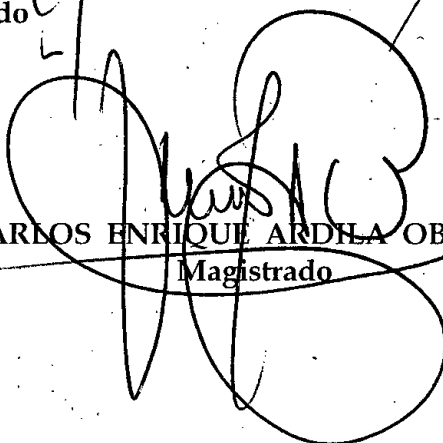
NOTIFIQUESE Y CÚPLASE,

TERESA HERRERA ANDRADE
Magistrada
(Ausente con permiso)


NILCE BONILLA ESCOBAR
Magistrada


HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO
Magistrado


CLAUDIA PATRICIA ALONSO IÑEZ
Magistrada


CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO
Magistrado